

- 1 Los nuevos juzgados de lo mercantil  
Commercial courts are created in Spain
- 2 El delito de falsificación de marcas  
Trademark Counterfeiting
- 3 Reglamento Comunitario sobre Intervención Aduanera  
Community Regulation on Customs Actions
- 4 Medidas cautelares en litigios sobre patentes  
químico-farmacéuticas  
Precautionary measures on pharmaceutical patents

## BARCELONA

Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021  
Tel.: (34) 93 202 34 56  
Fax: (34) 93 240 53 83

## MADRID

C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006  
Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16  
Fax: (34) 91 576 22 29

## 1 PROCESAL – ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO LOS NUEVOS JUZGADOS SEMI-ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL LITIGATION – SEMI-SPECIALIZED COURTS ARE SET UP TO DEAL WITH INTELLECTUAL PROPERTY CASES IN SPAIN

El pasado 1 de septiembre entraron en funcionamiento los nuevos “Juzgados de lo Mercantil”, que a partir de esa fecha conocerán en exclusiva de todos los litigios que se promuevan en materia de propiedad industrial, propiedad intelectual y competencia desleal, disciplinas éstas que pasan a quedar fuera de la competencia de los Juzgados de Primera Instancia (civiles).

**Desde el 1 de septiembre de 2004, los nuevos Juzgados de lo Mercantil son competentes para conocer en exclusiva de los litigios sobre propiedad industrial e intelectual**

Además de los litigios sobre propiedad industrial e intelectual, los Juzgados de lo Mercantil también enjuiciarán en exclusiva los casos de quiebras, transportes, Derecho Marítimo, publicidad, competencia, etc., entre otras materias específicas. Así, si bien la creación de estos juzgados responde a la necesidad de mejorar la calidad, uniformidad y celeridad de las resoluciones judiciales para, con ello, generar una mayor seguridad jurídica, lo cierto es que el grado de especialización de los nuevos Juzgados de lo Mercantil será tan sólo parcial o relativo, pues a pesar de todo tendrán que atender un gran volumen de asuntos sobre áreas del Derecho muy dispares entre sí.

La previsión legal es que haya uno o varios Juzgados de lo Mercantil en cada provincia, con jurisdicción en

On September 1st, the new Spanish “Juzgados de lo Mercantil” or commercial courts came into operation, to take over exclusive competence in intellectual property and unfair competition litigation from the existing “Juzgados de Primera Instancia” (Spanish civil courts of first instance).

**As of September 1, 2004, the new commercial courts have exclusive competence in intellectual property litigation in Spain**

Apart from dealing with judicial proceedings related to intellectual property, the new commercial courts will also have exclusive competence in cases belonging to other specific legal areas, such as insolvencies, transport, Maritime Law, advertising, competition, etc. So, although the creation of the commercial courts is meant to be a way of improving the quality, uniformity and swiftness of Spanish judgments and, therefore, increasing legal certainty, the truth is that, in fact, the degree of specialisation of these new courts will only be partial or relative, as they will still have to deal with a considerable amount of cases and very different areas of Law.

The legal project is to set up one or more commercial courts in every province, with

toda ella y sede en su capital, si bien de entrada se crearán sólo 24 nuevos juzgados (5 en Madrid, 4 en Barcelona, 2 en Valencia y uno en Cádiz, Málaga, Sevilla, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas, Tenerife, Alicante, A Coruña, Pontevedra, Murcia, San Sebastián y Bilbao). De momento, otros 12 Juzgados de Primera Instancia compaginarán sus funciones civiles con las de Juzgado de lo Mercantil en Almería, Córdoba, Granada, Zaragoza, Santander, León, Valladolid, Girona, Lleida, Tarragona, Logroño y Ceuta.

Por lo que se refiere a la segunda instancia, la reforma prevé que se especialicen una o varias Secciones de cada Audiencia Provincial a los efectos de conocer de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil.

**Los Juzgados de lo Mercantil de Alicante actuarán, a su vez, como Juzgados de Marca Comunitaria**

Finalmente, se establece que los Juzgados de lo Mercantil de Alicante actuarán, a su vez, como "Juzgados de Marca Comunitaria", esto es, conocerán en exclusiva de todos los litigios que se promuevan en España en relación con marcas y diseños comunitarios, extendiendo su jurisdicción a estos efectos a todo el territorio nacional.

jurisdiction over all of it and to be located in a capital city, although for the moment only 24 new courts will be created (5 in Madrid, 4 in Barcelona, 2 in Valencia and one in Cádiz, Málaga, Sevilla, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas, Tenerife, Alicante, La Coruña, Pontevedra, Murcia, San Sebastian and Bilbao). For the time being, another 12 civil courts of first instance will combine their civil functions with those of the commercial court in Almeria, Cordoba, Granada, Zaragoza, Santander, Leon, Valladolid, Girona, Lleida, Tarragona, Logroño and Ceuta.

As for the second instance, the reform establishes that one or more Sections of every Spanish Court of Appeal shall specialise and be competent to deal with and solve the appeals filed against the judgments rendered by the commercial courts

**The commercial courts of Alicante shall act as Community trade mark courts**

Finally, it is established that the commercial courts of Alicante will act, in turn, as Community trade mark courts, i.e. they will have exclusive competence and jurisdiction all over Spain on all suits related to Community trade marks and designs.

## 2 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÓRDOBA FIJA CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN SOBRE EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MARCAS.

### THE CORDOBA CRIMINAL COURT OF APPEAL SETS CRITERIA FOR INTERPRETING TRADEMARK COUNTERFEITING

El pasado mes de junio, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba dictó una muy interesante sentencia de apelación en un procedimiento penal que enfrentaba a los titulares de las marcas Adidas, Burberry, Nike, Polo Ralph Lauren, Lacoste, Reebok y Tommy Hilfiger contra un particular que explotaba un taller clandestino de confección en Lucena.

Antecedentes: En julio de 2000 a consecuencia de una intervención policial en dicho taller de confección, la policía encontró productos (prendas confeccionadas) con las marcas, etiquetas de dichas marcas sueltas para ser cosidas a las prendas, bolsas y envoltorios de plástico con los signos de algunas de las marcas indicadas, máquinas que incorporaban el software necesario para

Last June, the second section of the Cordoba Court of Appeal pronounced a very interesting appeal in a criminal proceeding involving the holders of trademarks Adidas, Burberry, Nike, Polo Ralph Lauren, Lacoste, Reebok and Tommy Hilfiger, against an individual who was operating from a clandestine clothes manufacturing workshop in Lucena.

Background: In July 2000 following a police raid in a clothes manufacturing workshop, products (manufactured garments) were found with the trademarks, loose labels from these marks ready to be sewn on to the clothing, bags and plastic wrapping bearing the signs of some of the marks, embroidery machines incorporating the necessary

bordar los signos de las diferentes marcas, diskettes informáticos con la información necesaria para reproducir los signos y diversa documentación entre las que se encontraban unas notas manuscritas donde se indicaba cómo borrar las pistas del software utilizado. Debe indicarse que, además, cuando la Policía realizó la intervención se estaban bordando en ese momento alguna de las marcas, por lo que el acusado fue sorprendido in fraganti.

En primera instancia, el Juzgado de lo Penal dictó una sentencia absolutoria basándose, fundamentalmente en el hecho de que las prendas falsificadas eran de tan mala calidad que no existía riesgo de error para el consumidor.

La Audiencia Provincial de Córdoba estimó la apelación y revocó la sentencia absolutoria en una muy interesante decisión que trata las cuestiones que suelen plantearse en este tipo de litigios y de la que merecen destacarse los siguientes puntos:

- En relación con la necesidad de que exista una denuncia previa presentada por una persona especialmente apoderada para que se pueda perseguir el delito de falsificación, la sentencia establece que la ausencia de esa denuncia o la ausencia de poder especial para denunciar constituye un defecto subsanable mediante la personación en la causa del propietario de la marca. Aunque esta exigencia desaparecerá tras la última reforma del Código Penal, la sentencia viene a resolver un problema muy importante en la práctica y que afecta a muchos litigios penales de falsificación de marcas en los que la actuación policial se inició antes de 1º de Octubre de 2004.

**Respecto de la doctrina del “error del consumidor” la sentencia establece que el único bien protegido por el artículo 274 del Código Penal, es el derecho del titular de la marca a una explotación exclusiva**

- La sentencia tiene en cuenta los mínimos de protección conferidos al titular de una marca en el Convenio ADPIC, lo que no es habitual en la Jurisdicción penal a pesar de que el Convenio ADPIC, en su artículo 61, establece expresamente la necesidad de que se confiera una protección penal a las marcas.

software to embroider the signs of the different trademarks, diskettes with information for reproducing signs and documentation with information as to how to delete or cover up the tracks of the software being used. Also, at the time of the police raid, some of the signs were actually being sewn on to clothing so that the accused was caught “in fraganti”.

The first instance Criminal Court pronounced an unexpected verdict of not guilty based mainly on the fact that the counterfeit clothing was of such bad quality that the consumer was at no risk of error.

The Cordoba Court of Appeal admitted the grounds of the appeal, revoking the verdict of not guilty in a very interesting decision which deals with the most typical problems that trademark owners usually face in criminal anticounterfeiting cases (underlined by the following points):

- Regarding the need for a previous denunciation by a person with a formal ad hoc power the judgement sets out that the absence of this denunciation or the absence of a special power ad hoc to make such a denunciation, constitutes a defect which can be corrected by the appearance of the trademark holder as a private prosecutor in proceedings. Although this requirement will disappear following the latest reform of the Penal Code, the judgement solves a very important problem in practice which affects many ongoing criminal cases concerning counterfeit goods in which the police intervened before 1 October 2004.

**With regard to the “consumer error” doctrine, the judgement establishes that the only thing protected by article 274 of the Penal Code is the trademark holder’s right to enjoy exclusivity**

- The judgement considers the minimum protection conferred to the trademark holder by the TRIPS Agreement, which is not usual in penal jurisdiction although the TRIPS Agreement, in article 61, expressly establishes the need to confer penal protection to the trademark rights.

- Respecto de la doctrina del “error del consumidor” la sentencia establece que el único bien protegido por el artículo 274 del Código Penal, es el derecho del titular de la marca a una explotación exclusiva, y rechaza que en ausencia de ese “error del consumidor” proceda absolver al acusado.

- Se efectúa una interpretación del principio de intervención mínima en relación con este tipo de delitos, en el sentido de considerar dicho principio supeditado al de legalidad descartando así una interpretación muy restrictiva del artículo 274 del Código Penal, que han venido aplicando algunos Tribunales.

En definitiva, se trata de una sentencia que trata los principales problemas con que se encuentran habitualmente los titulares de marcas al ejecutar sus derechos en sede penal, y que establece criterios claros de interpretación contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica respecto de este delito.

- With regard to the “consumer error” doctrine, the judgement establishes that the only thing protected by article 274 of the Penal Code, is the trademark holder’s right to enjoy exclusivity, and it rejects the fact that in the absence of this “consumer error” the accused should then be absolved.

- The “Principle of Minimum Intervention” of criminal law which brings some judges to consider that IP offences have to be filed with the civil courts, is here interpreted with regard to this type of infringement, as being subordinate to the “Principle of Legality” and this rules out a very restrictive interpretation of article 274 of the Penal Code, which some courts have been applying.

In conclusion, this judgement addresses the main problems often encountered by trademark holders exercising their rights in a criminal court, setting clear criteria for interpretation and, in this way, helping to increase legal protection with regard to this type of infringement.

### 3 REGLAMENTO COMUNITARIO Nº 1383/2003 SOBRE INTERVENCIONES ADUANERAS DE PRODUCTOS QUE VULNERAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

#### COMMUNITY REGULATION Nº 1383/2003 ON CUSTOMS ACTIONS AGAINST PRODUCTS INFRINGING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

El pasado 1 de julio de 2004 entró en vigor el Reglamento nº 1383/2003, del Consejo, derogando y sustituyendo el Reglamento nº 3295/94, relativo a la intervención de las Autoridades Aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de Propiedad Intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos.

De acuerdo con lo previsto en el nuevo Reglamento se entiende por mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual:

\* Las mercancías falsificadas, es decir, aquellas en las que figure sin autorización una Marca de fábrica o comercial idéntica a una Marca registrada de forma válida o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esta Marca registrada.

\* Las mercancías piratas, es decir, las mercancías que son o que contienen copias fabricadas sin el consentimiento del titular de los derechos de autor o los derechos afines o del titular de un derecho sobre el dibujo o modelo registrado o no.

\* Las mercancías que en el Estado miembro donde se presente la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras vulneren: i) una Patente, ii) un certificado

On 1 July 2004, the Council Regulation nº 1383/2003 came into force, replacing the Regulation (EC) nº 3295/94, concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights.

For the purpose of said Regulation, “goods infringing an intellectual property right” means:

\* Counterfeit goods, namely, goods bearing, without authorisation, a trademark identical to a registered trademark or one that cannot essentially be distinguished from this registered trademark.

\* Pirated goods, namely goods which are or contain copies made without the consent of the holder of a copyright or related right or design right, regardless of whether it is registered.

\* Goods which, in the Member State in which the application for customs action is made, infringe: i) a Patent, ii) a supplementary

complementario de protección, iii) un título nacional de protección de variedades vegetales, iv) denominaciones de origen o indicaciones geográficas o v) denominaciones geográficas.

Ahora bien, el Reglamento excluye expresamente de su ámbito de aplicación:

\* Las importaciones paralelas, es decir, las mercancías a las que se ha puesto una Marca de fábrica o comercial con el consentimiento del titular de dicha Marca y/o aquellas mercancías que hubiesen sido fabricadas con el consentimiento del titular del correspondiente derecho, pero que, sin el consentimiento del mismo, pretendan introducirse en el Espacio Económico Europeo.

\* Las mercancías contenidas en los equipajes de viajeros, en el supuesto de que no exista ningún indicio material que indique que las mercancías forman parte de un tráfico comercial.

**Una de las principales novedades del Reglamento es la posibilidad de establecer un procedimiento más flexible para la destrucción de aquellas mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de Propiedad Intelectual y/o Industrial**

En relación a las importaciones paralelas habrá que ver qué tratamiento se da a las mismas por parte de las Autoridades Aduaneras, teniendo que cuenta que a partir del 1 de Octubre de 2004 entrará en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de Noviembre, que tipifica como delitos las importaciones paralelas extracomunitarias, previendo para sus responsables la pena de seis meses a dos años de prisión.

Por otra parte, una de las principales novedades del Reglamento, y de mayor trascendencia práctica, es la posibilidad de los Estados Miembros de dotar a las Aduanas y a los titulares de derechos de un procedimiento más flexible para la destrucción de aquellas mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de Propiedad Intelectual y/o Industrial, y ello sin obligación de entablar otro tipo de procedimiento, como sería el judicial, para determinar si se han vulnerado tales derechos.

La disposición, en su caso, del llamado procedimiento simplificado, permitirá que las Autoridades Aduaneras dispongan el abandono de las mercancías retenidas para

protection certificate, iii) a national plant variety right, iv) designation of origin or geographical indications or, v) geographical designations.

However, the Regulation expressly considers being outside its scope:

\*Parallel imports, that is, goods bearing a trademark with the consent of the holder of that trademark and/or goods which have been manufactured with the consent of the right holder but which, without the latter's consent, try to enter into the Community.

\*Goods contained in travellers' personal baggage, in so far as there are no material indications to suggest the goods are part of commercial traffic.

**One of the main changes introduced by the Regulation is the possibility of providing a more flexible procedure for the destruction of those goods suspected of infringing IP rights**

Regarding parallel imports, it has to be seen what the attitude of the Customs authorities would be, taking into account that from 1 October 2004, the reform of the Penal Code will come into force, as set out in the Organic Law 15/2003, of 25 November, and that, parallel imports from outside the EC will be considered a criminal offence, with a stipulated 6 months to 2 years custodial judgement.

Secondly, one of the main changes introduced by the Regulation, and of particular significance in practice, is the possibility for the Member States to provide Customs and right holders with a more flexible procedure for the destruction of those goods suspected of infringing an intellectual property right, without having to initiate other proceedings, such as judicial ones, to determine if the rights have been infringed.

In the case that the said simplified procedure were to be provided, Customs Authorities could have the retained goods abandoned for



su destrucción bajo control aduanero, sin que sea necesaria una resolución judicial declarativa de la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial.

A efectos de obtener la mencionada destrucción, será necesario que dentro del plazo de diez días laborables a contar desde que la Autoridad Aduanera comunique la suspensión de la concesión del levante o retención de mercancías presuntamente fraudulentas, el titular del derecho notifique por escrito a dichas Autoridades que las mercancías vulneran efectivamente sus derechos y proporcione, a las repetidas Autoridades, un acuerdo escrito con el importador de las mercancías conforme el mismo renuncia a las mismas a fin de que sean abandonadas para su destrucción. En el supuesto de que el importador no se haya opuesto expresamente a dicha destrucción dentro del plazo establecido, se presumirá su aceptación al acuerdo de abandono y destrucción.

El plazo inicial de diez días laborables podrá ampliarse en otros diez días hábiles cuando las circunstancias así lo requieran.

En cualquier caso, teniendo en cuenta el carácter potestativo del mencionado procedimiento simplificado, en la práctica, dicho procedimiento no será de aplicación en España hasta que el mismo sea debidamente regulado a través del preceptivo Reglamento de aplicación.

De esta forma, a fecha de hoy, los titulares de los derechos se ven aún en la obligación de iniciar el correspondiente procedimiento judicial destinado a determinar si se han vulnerado dichos derechos.

Por último, indicar que este nuevo Reglamento prevé que las solicitudes de intervención vayan acompañadas de una declaración del titular del derecho, por la que el mismo acepte su responsabilidad hacia las personas afectadas por la aplicación del Reglamento en aquellos supuestos en que, finalmente, se establezca que las mercancías no vulneran ningún tipo de derecho.

destruction under customs control, without there being any need to determine whether intellectual property right has been infringed.

In order to secure the destruction of the goods, the right-holder would need to inform the customs authorities in writing within 10 working days, of receipt of the notification of retention, that the goods concerned in the procedure, do in fact, infringe an intellectual property right and provide those authorities with the written agreement of the importer of the goods to abandon the goods for destruction. The said agreement shall be presumed to be accepted when the importer has not specifically opposed destruction within the prescribed period.

The initial period of 10 working days may be extended by a further ten working days where circumstances warrant it.

However, as the simplified procedure is not compulsory, in practice, the said procedure will not be applicable in Spain until the simplified procedure is regulated under the mandatory Spanish regulation implementing the Regulation.

Therefore, at this moment in time, the right holders are still obliged to initiate judicial proceedings, to determine whether an intellectual property right has been infringed, in order to avoid the release of the retained goods.

Finally, it is worth mentioning that the new Regulation stipulates that applications for action shall be accompanied by a declaration from the right holder, accepting liability towards the persons affected by the application of the Regulation in the event that the goods in question are subsequently found not to infringe a right.

## **4 MEDIDAS CAUTELARES EN LITIGIOS SOBRE PATENTES QUÍMICO-FARMACÉUTICAS: RESOLUCIONES JUDICIALES RECIENTES**

### **RECENT COURT DECISIONS ON PRECAUTIONARY MEASURES CONCERNING PHARMACEUTICAL PATENTS**

---

El pasado 1 de marzo de 2004 la Sección 10 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Auto confirmatorio del de primera instancia desestimando una solicitud

On 1 March 2004, Section 10 of the Madrid Court of Appeal pronounced a judgement confirming the first instance which overruled the application

de medidas cautelares formulada por el titular de dos patentes de procedimiento para la obtención de productos nuevos. La peticionaria de las medidas invocaba la aplicación de la inversión de la carga de la prueba establecida en el Art. 61.2 de la Ley de Patentes. Este precepto dispone que cuando el producto obtenido mediante el procedimiento patentado sea un producto nuevo, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto de las mismas características ha sido obtenido a través de dicho procedimiento patentado.

En su resolución, la Audiencia analiza en primer lugar las discrepancias existentes entre los peritos químicos que emitieron los informes técnicos aportados por las partes al proceso y las declaraciones manifestadas por ellos en el acto de la vista judicial. A juicio del Tribunal, dichas discrepancias introducen en el proceso cautelar una serie de dudas que únicamente pueden ser despejadas, en un sentido (infracción) o en otro (no infracción), en el proceso principal, es decir, entrando a analizar el fondo de la litis; pero además sirven para poner en entredicho la apariencia de buen derecho del solicitante de las medidas cautelares.

Después, la Audiencia pasa, aunque con la provisionalidad propia del proceso cautelar, a profundizar sobre la cuestión de fondo, indicando que los procedimientos químicos enfrentados (el patentado y el que utiliza el demandado) parecen en principio diferentes, estableciendo dónde radicarían principalmente las diferencias y que centra, concretamente, en los mecanismos de reacción.

A partir de esas y otras consideraciones, la citada resolución judicial concluye manifestando que ha quedado destruida la presunción a que se refiere el Art. 61.2 de la Ley de Patentes, menos exigente en sede cautelar que en el juicio propiamente dicho en cuanto a prueba en contrario. De hecho, el Tribunal va más allá e interpreta el alcance de la carga de la prueba que impone dicho precepto, al señalar que dicha carga se cumple por el demandado revelando las características de su procedimiento, y una vez hecho esto, corresponderá al titular de la patente demostrar que ese concreto procedimiento infringe su derecho de patente.

En fecha más reciente (15 de junio de 2004), en otro litigio sobre las mismas patentes de procedimiento químico, la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Auto revocando las medidas cautelares que habían sido acordadas en primera instancia. En este caso, el Tribunal empleó un razonamiento muy similar al de la resolución anteriormente comentada, esforzándose también por comprender dónde se encuentran las diferencias entre el procedimiento patentado y el procedimiento utilizado por el demandado y destacándolas con las mismas cautelas y provisionalidad.

for an interim injunction formulated by the holder of two patents on chemical processes for the manufacturing of new products. The party requesting the measures referred to the application of the reversal of the burden of proof set out in Art. 61.2 of the Spanish Patent Act. This precept establishes that when the product obtained by means of the patented process is new, it is assumed, unless otherwise proved, that every product with the same characteristics has been obtained through the same patented process.

The Court of Appeal first analyses the existing discrepancies between the chemical experts who issued the technical reports enclosed to the contributions by the parties and who had been cross-examined at Court. In the opinion of the court, these discrepancies raise a series of doubts in the precautionary process which can only be cleared up in one way (infringement) or another (non infringement) on the merits of the case, by in depth analysis; but they pose a doubt regarding the *fumus boni iuris* of the party requesting the measures.

Following this, the Court of Appeal, if only with the provisional nature demanded by litigation on interim measures, finds that the chemical processes under question (patented process vs. defendant's process) do appear to be, in principle, different in terms of the reaction mechanisms involved.

Under these and other considerations, the mentioned judicial resolution concludes that the presumption set out in Art. 61.2 of the Spanish Patent Act, which is deemed by the Court to be less strict in interim proceedings than in the proceedings on the merits, has been destroyed by the defendant. In fact, the Court goes further and interprets the scope of the burden of proof which that precept imposes, by pointing out that this burden is complied with by the defendant by revealing the characteristics of its process, and once this is done, the patent holder will be required to demonstrate that this process does infringe his patent rights.

Most recently (15 June 2004), in another case concerning the same chemical process patents, Section 12 of the Madrid Court of Appeal pronounced a judgement, which overruled the precautionary measures agreed in the first instance. In this case, the Court used similar reasoning to the previously commented judgement, again pointing out where the differences between the patented process and the defendant's process would be.

**GRAU, BAYLOS & ANGULO**

ABOGADOS

**BARCELONA**

Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021

Tel.: (34) 93 202 34 56

Fax: (34) 93 240 53 83

**MADRID**

C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006

Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16

Fax: (34) 91 576 22 29